



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL.

Medellín, dos (02) de agosto de dos mil veintidós (2022).

DEMANDANTE:	LINA MARÍA ARANGO LÓPEZ.
DEMANDADO:	COLPENSIONES
INTERVINIENTE	
AD EXCLUDENDUM:	MARÍA HOYORVIS MONSALVE ÁLVAREZ
TIPO DE PROCESO:	ORDINARIO
DECISIÓN:	REVOCA

En la fecha, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, se reunió para resolver el recurso de apelación presentado por la Parte demandada en reconvención (demandante principal), en el Proceso Ordinario Laboral adelantado por la Señora **LINA MARÍA ARANGO LÓPEZ** en contra de **COLPENSIONES**, donde funge como Interviniente la Señora **MARÍA HOYORVIS MONSALVE ÁLVAREZ**, frente al Auto proferido por el Juzgado de instancia, mediante el cual dio por no contestada la demanda de Reconvención.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN ESTA INSTANCIA.

PARTE DEMANDANTE: Expresó que el A quo mediante Auto del 04 de agosto de 2021 notificó por Estados la admisión de la demanda de reconvención presentada por la señora María Hoyorvis Monsalve Álvarez, en contra de COLPENSIONES y de la señora Lina María Arango; pero que nunca se le envió copia de ésta, ni por la parte demandante en reconvención ni por el Despacho de instancia a pesar de haber sido solicitado en dos ocasiones; esto es, el 04 de agosto y el 09 de diciembre de 2021.

Que pese a ello, el A quo mediante Auto del 05 de abril del 2022 dio por no contestada la demanda de reconvención por parte de la señora Lina María Arango López (demandante principal), desconociendo el contenido del Decreto 806 de 2020, lo cual le vulnera ostensiblemente los derechos fundamentales de defensa, contradicción y acceso a la administración de justicia.

La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por la Ponente, el cual se traduce en la siguiente decisión:

AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA

ANTECEDENTES:

La actora presentó Demanda Ordinaria Laboral el 28/02/2017 (folio 23 anexo 2) en contra de **COLPENSIONES** y de la señora **MARÍA HOYORVIS MONSALVE ÁLVAREZ**, pretendiendo se ordene a la entidad suspender el pago del 50% de la sustitución pensional reconocida a la última; y consecuencialmente se le reconozca a la primera el 100% de dicha prestación.

El A quo mediante Auto del 10/08/2020 (anexo 55) y como medida de saneamiento, dejó sin efecto el Auto del 20/10/2017 (admisión de la demanda de Reconvención); y en su lugar, dispuso el rechazo de la misma, concediendo a la litisconsorte necesaria por pasiva, señora **MARÍA HOYORVIS MONSALVE ÁLVAREZ**, el término de 15 días hábiles para que si a bien lo tiene, formule nueva demanda de reconvención; término que fue prorrogado mediante Auto del 01/10/2020 (anexo 58).

Mediante Correo Electrónico del 23/10/2020 (anexo 59) la parte Interviniente presentó demanda de reconvención, la cual fue admitida por el Despacho de Instancia mediante Auto del 03/08/2021 (anexo 61), indicando que como los demandados ya hacían parte del Proceso, su notificación se surtía por Estados, corriéndose traslado de la demanda de Reconvención por el término de 10 días.

Frente a ella se pronunció Colpensiones, dándole contestación, siendo admitida por el A-quo mediante Auto del 05/04/2022, y dándola por no contestada por la Parte demandante (anexo 65).

Inconforme con dicha decisión, ésta última presentó **Recurso de Apelación** mediante memorial del 18/04/2022 (anexo 66), argumentando que luego de ser admitida la demanda de la Interviniente, solicitó en dos ocasiones copia de la misma, esto es, el 04 de agosto y el 09 de diciembre de 2021, en aras de ejercer su derecho de contradicción, pero tales peticiones fueron desatendidas, y por el contrario, se tuvo por no contestada dicha demanda por su parte, violándose así su derecho de defensa y acceso a la administración de justicia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA.

- Competencia: Principio Consonancia art. 66A del C.P.T. y S.S, adicionado, art 35 de la L. 712 de 2001.
- Objeto: Determinar si en el caso a estudio, hizo bien o no el A quo en tener por no contestada por la demandante principal, la Demanda de Reconvención instaurada por la Interviniente. Veamos:

El artículo 74 del C. de P. L. y de la S.S. es del siguiente tenor literal:

*“Admitida la demanda, el juez ordenará que se dé traslado de ella al demandado o demandados para que la contesten y al Agente del Ministerio Público si fuere el caso, **por un término común de diez (10) días**, traslado que se hará entregando copia del libelo a los demandados”.*

Pues bien, el Decreto 806 de 2020 (norma vigente para la fecha de presentación de la demanda de la Interviniente – hoy Ley 2213 de 2022), por medio del cual se adoptaron medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, estableció como marco fundamental los Principios de agilidad y flexibilidad de todos los trámites en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, exigiéndole al operador judicial flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y permitiéndole a los sujetos procesales actuar y aportar documentos a través de los diferentes medios digitales disponibles, sin limitación o restricción alguna, siempre y cuando se cumpla el fin para el cual fueron aportados.

Este Decreto en lo pertinente consagra:

“Artículo 1. Objeto. Este decreto tiene por objeto **implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria** en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así como, las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales, durante el término de vigencia del presente decreto. **Adicionalmente, este decreto pretende flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y contribuir a la pronta reactivación de las actividades económicas que dependen de este.**
...”

“Artículo 2. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. **Se deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia**, como también proteger a los servidores judiciales, como a los usuarios de este servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y **se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias.** Por tanto, las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios físicos.

....

Parágrafo 1. Se adoptarán todas las medidas para garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicción en la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Para el efecto, las autoridades judiciales procurarán la efectiva comunicación virtual con los usuarios de la administración de justicia y adoptarán las medidas pertinentes para que puedan conocer las decisiones y ejercer sus derechos.

....

“Artículo 3. Deberes de los sujetos procesales en relación con las tecnologías de la información y las comunicaciones. **Es deber de los sujetos procesales realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de medios tecnológicos. Para el efecto deberán suministrar a la autoridad judicial competente, y a todos los demás sujetos procesales, los canales digitales elegidos para los fines del proceso o trámite y enviar a través de estos un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen, simultáneamente con copia incorporada al mensaje enviado a la autoridad judicial.**

....

“Artículo 6. Demanda. La demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda.

Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos, a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto, cuando haya lugar a este.

....

En cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda. **De no conocerse el canal de digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos”.**

....

“Artículo 8. Notificaciones personales. Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.

El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.

....

Parágrafo 2. La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas Web o en redes sociales”.

Y el artículo 25 del CPT y de la SS informa que:

“La demanda deberá contener:

1. La designación del juez a quien se dirige.

2. El nombre de las partes y el de su representante, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas.
3. El domicilio y la dirección de las partes, **y si se ignora la del demandado o la de su representante si fuere el caso, se indicará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda.** (....)".

El **Debido Proceso**, derecho de rango constitucional (Art. 29 CPN), fue definido por nuestra Corte Constitucional en SC-341 de 2014, con ponencia del Dr. Mauricio González Cuervo, como *"el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. (...)"*.

En ese orden de ideas, en el marco de la PANDEMIA por el "COVID – 19", en la práctica judicial se ha venido implementado la virtualidad, muchos de cuyos procesos de manejo de la información todavía se están adecuando, y es por ello que cada situación debe ser ponderada a partir del Principio de buena fe, el cual se presume en toda actuación de los particulares ante las autoridades. Al respecto la citada Corporación tuvo oportunidad de pronunciarse en la SC 1194-08, así:

"[...] la buena fe ha pasado de ser un principio general de derecho para transformarse en un postulado constitucional, su aplicación y proyección ha adquirido nuevas implicaciones, en cuanto a su función integradora del ordenamiento y reguladora de las relaciones entre los particulares y entre estos y el Estado. En este orden de ideas la jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una "persona correcta (vir bonus)". En este contexto, la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la "confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada".

En el caso a estudio, observa esta Colegiatura que la Parte Interviniente presentó demanda de Reconvención el 23/10/2020 (anexo 59), afirmando en el encabezado de la misma que **"la demandante principal no informa correo y el de la señora apoderada de esta es rechazado"**, y que en el acápite de direcciones para notificaciones, el correo del apoderado principal de la parte demandante es: hernandj74hotmail.com.

Pues bien, luego del análisis de la prueba obrante al interior del Proceso, considera la Sala no estar de acuerdo con el rechazo de la contestación a la demanda de reconvención presentada por la demandante principal, dado que en primer lugar, la Interviniente no aportó prueba alguna que permita verificar o inferir que el correo enviado fue rechazado; máxime que el correo electrónico del apoderado de la demandante principal no coincide con el referido en la demanda de reconvención, ya que el verdadero es **hernandj74@hotmail.com**. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que ante el desconocimiento de dicha demanda, el apoderado de la Parte demandada en la reconvención (demandante principal), solicitó al Juzgado de Instancia copia de la misma,

mediante dos memoriales de fechas, 04 de agosto (anexo 62) y 09 de diciembre de 2021 (anexo 64), en aras de ejercer su derecho de contradicción, pero no encontró respuesta satisfactoria por parte del Despacho de instancia, el cual no le dio trámite a tales memoriales, omitiendo enviarle la copia de la citada demanda.

Y es que no desconoce esta Colegiatura que es cierto que conforme al Ordenamiento Procesal Laboral es obligación de las Partes estar atentas a los ritos establecidos por la ley y a las exigencias que haga el Juez director del proceso, pero ello no puede ir en detrimento o en contravía de los derechos fundamentales de las Partes, entre ellos, el acceso a la administración de Justicia, lo cual puede ocurrir por un exceso de ritualismo.

Entonces, por no haber prueba en el Proceso de que la Parte Interviniente haya notificado la demanda de reconvención a la actora principal, lo cual era su obligación de conformidad con lo establecido en el Decreto 806 de 2020 (hoy Ley 2213 de 2022), para poder así contabilizarse el término para su contestación señalado en el artículo 74 del C. de P. L. y de la S.S.; y como el A quo tampoco envió tal demanda a la Parte actora principal que lo solicitó, considera la Sala que no debe ser esta última la que asuma las consecuencias de tales omisiones, so-pena de violar sus derechos fundamentales a la defensa, contradicción y acceso a la administración de justicia.

Y es por ello que se **REVOCARÁ** el Auto proferido el 05 de abril de 2022 por el A-quo, en cuanto dio por no contestada la demanda de Reconvención; para en su lugar, **ORDENAR** la notificación de la misma a la Parte opositora, de conformidad con lo establecido en la Ley 2213 de 2022, contando esta última para contestar la misma, con el término de diez (10) días a partir de la fecha de notificación, conforme lo dispone el artículo 74 del CPTSS.

Sin Costas Procesales de Segunda instancia al prosperar el recurso interpuesto.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

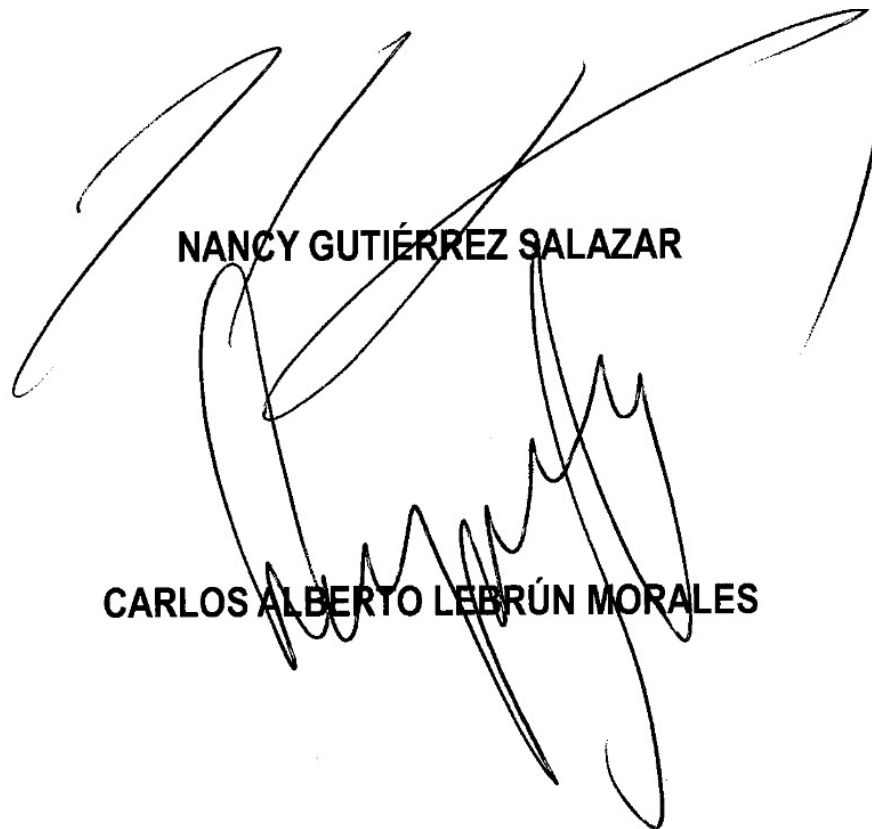
PRIMERO: REVOCAR el Auto proferido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín el 05 de abril de 2022, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por la Señora **LINA MARÍA ARANGO LÓPEZ** en contra **COLPENSIONES**, y en calidad de Interviniente la Señora **MARÍA HOYORVIS MONSALVE ÁLVAREZ**; en cuanto dio por no contestada la demanda de Reconvención por parte de la demandante principal; para en

su lugar, **ORDENAR** la notificación de dicha demanda, con el envío de la misma a esta última Parte, contando ella con el término de diez (10) días a partir de dicha fecha para contestarla, según las consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: Sin Costas Procesales de Segunda instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes por **Estados** virtuales, artículo 295 C.G. del P. en concordancia con la Ley 2213 de 202; y se firma por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados,



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

EN AUSENCIA JUSTIFICADA
MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÀSQUEZ

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N° 135 de agosto 03 de 2022.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>